



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA CIVIL

Medellín, veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2.023)

MAGISTRADO: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
RECURSO DE QUEJA: 05001 31 03 021 2021 00413 02

Proceso: Declarativo – responsabilidad civil extracontractual.
Demandantes: LIZETH JOHANA LÓPEZ SILVA y otros
Demandados: JORGE IVAN JARAMILLO PÉREZ y otro.
Extracto: Estima mal denegado. Concede alzada.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve el recurso de queja interpuesto por la parte demandante, frente al auto calendado el tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2.022), proferido por el JUZGADO VEINTIUNO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD de Medellín.

ANTECEDENTES

En su oportunidad la codemandada SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., allegó el dictamen pericial denominado “*de reconstrucción de accidente de tránsito*”, el cual se puso en conocimiento de las partes a través del auto del 17 de agosto de 2.022¹.

El 19 de agosto siguiente la parte actora allegó escrito deprecando la comparecencia de los peritos que elaboraron la experticia, a la

¹ Ver archivos 30 y 33 en el Expediente Digital.

audiencia de instrucción y juzgamiento, al paso que anunció que aportaría otro peritazgo, el cual *“está siendo confeccionado”*, solicitando se le concediera *“un tiempo prudencial de 20 días hábiles para allegarlo debido a que la parte demandante apenas está acopiando los recursos económicos para tal fin.”*².

El 6 de septiembre pasado, el *a quo* refirió que existe el deber de comparecencia de los peritos, pero negó un plazo adicional para allegar un nuevo dictamen, pues ello es improcedente a la luz del artículo 228 del C. G. del P., donde la falta de recursos no es causal para ampliar el término³.

Frente a lo anterior la parte actora presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación, aduciendo que se trata de una interpretación arbitraria que afecta la contradicción de la prueba, teniendo derecho a presentar probanzas y a contradecir las allegadas en su contra, siendo una garantía fundamental del debido proceso.

Destacó que conforme al artículo 227 procesal civil, se puede anunciar el aporte de la experticia, pues el término de tres (3) días resulta corto para lo propio, aunado si se tiene en cuenta sus restricciones económicas, debiéndose tener una lectura sistemática de los artículos 227 y 228 ídem, debiéndose procurar la igualdad real entre las partes.

Mediante el auto recurrido el *a quo* mantuvo su decisión, al paso que negó la alzada tras considerar que el asunto no es apelable a la luz del artículo 321 del C. G. del P., en tanto que la providencia impugnada no resuelve el decreto o práctica de una prueba, sino, sobre la ampliación de un término legal⁴.

² Archivo 34 ídem.

³ Archivo 36 de igual expediente.

⁴ Archivos 37 y 39 ejusdem.

Frente a la decisión de negar la apelación, la demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio queja, arguyéndose que el propósito del recurso es materializar la práctica de una prueba, punto que tiene gracia de alzada según el artículo 321.3 del C. G. del P., siendo errado considerar que se trata de la ampliación de un término, lo cual es la mera forma para ejercer el derecho a la contradicción⁵.

En el correspondiente traslado la demandada y llamada en garantía guardaron silencio; y la audiencia celebrada el 17 de noviembre de 2.022, el Juzgado de primera instancia mantuvo la decisión, aunque concedió la queja en estudio⁶, la que se resuelve, previas:

CONSIDERACIONES

El recurso de queja tiene como fin que el Superior funcional conceda el recurso que hubiera sido denegado, siempre que este fuere procedente (art. 352 C. G. del P.)⁷.

La Constitución Política consagra como regla general el principio de doble instancia (artículo 31), el que puede ser limitado por el legislador, ya que como dice tal supuesto normativo, toda decisión judicial puede ser; “*apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley...*”, (subrayado extra texto); es decir, la ley puede limitar la alzada en situaciones específicas.

Sobre tal principio, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho:

⁵ Archivo 40 del Expediente Digital

⁶ Archivo 45- Audiencia - minutos 10:17 a 21:05.

⁷ Según constancia secretarial del 21 de febrero de 2.023, de la queja se dio el, sin pronunciamientos.

“[E]s el medio más efectivo para remediar las irregularidades o desaciertos en que pueda incurrir el funcionario del conocimiento de una puntual actuación judicial, de manera que el mismo se constituye en ‘una piedra angular dentro del Estado de derecho’, como quiera que garantiza, en forma plena y eficaz, el derecho de defensa al permitir que ‘el superior jerárquico del funcionario encargado de tomar una decisión en primera instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al convencimiento de que la determinación adoptada se fundamentó en suficientes bases fácticas y legales o que, por el contrario, desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente (...)” . STC5414-2021.

Es decir, la restricción a la doble instancia la impone la misma ley, donde en el caso que nos ocupa la alzada se negó frente al auto del seis (6) de septiembre pasado, el cual resolvió negativamente el pedido de la parte actora en cuanto a concederle un término adicional para aportar un dictamen, con el que al parecer, ejercería contradicción frente al que allegó su contraparte. Vale precisar que esa solicitud se hizo dentro del término de traslado de la experticia arribada por esta.

De esa manera, el fondo del asunto es la práctica y contradicción de una prueba pericial, decisión esta que resulta apelable según el numeral 3° del artículo 321 procesal civil, donde las correspondientes normas han de interpretarse de manera integral y aplicando el principio *pro homine*⁸.

⁸ Sobre el mismo la Corte Constitucional ha dicho: ““*El principio de interpretación <pro homine>, impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional*”. Éste es entonces un criterio de interpretación que se fundamenta en las obligaciones contenidas en los artículos 1° y 2° de la Constitución antes citados y en el artículo 93, según el cual los derechos y deberes contenidos en la Constitución se deben interpretar de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En lo que tiene que ver con los derechos, los mencionados criterios hermenéuticos se estipulan en el artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente, se debe afirmar que estos criterios configuran parámetro de constitucionalidad, pues impiden que de una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales. El principio *pro persona*, impone que “sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera [aquella] que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental”.” Sentencia C 438 de 2.013.

En tales términos, si lo que se decidió de fondo tiene que ver con la práctica de una probanza y su contradicción, a ello debemos atenernos, por lo que el punto resulta apelable según el citado numeral 3° del artículo 321 del C. G. del P., concluyéndose que ha de concederse la alzada.

Dada la prosperidad de la queja, la alzada en estudio debería admitirse en el efecto devolutivo, tal como lo consagra el artículo 323 del C. G. del P.; sin embargo, como mediante providencia del catorce de febrero de dos mil veintitrés, esta Corporación admitió recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia formulado por la parte aquí recurrente, ello en el efecto suspensivo, a ello nos atendremos.

Lo anterior en cuanto a que en el efecto suspensivo, “... *la competencia del juez de primera instancia se suspenderá desde la ejecutoria del auto que la concede hasta que se notifique el de obediencia a lo resuelto por el superior.*”, por lo que mal haría la Sala en habilitar la competencia del *a quo* si la alzada que se viabiliza en esta queja fuera en el efecto devolutivo, pues como lo dice el correspondiente supuesto normativo; “... *no se suspenderá... el curso del proceso...*”, recalcando que la competencia del *a quo* ya está suspendida.

Sin costas en la medida que no se advierte su causación, tal como lo autoriza el numeral 8° del artículo 365 del C. G. del P..

Conforme lo expuesto, el Tribunal;

RESUELVE

PRIMERO: Declarar INDEBIDA LA NEGACIÓN del recurso de apelación incoado por la parte demandante contra el auto del seis (6) de septiembre de dos mil veintidós (2.022), para en su lugar ADMITIR el dicho recurso, con la precisión que el efecto será como se indicó en el auto del catorce (14) de febrero hogaño (2.023), tal como se expuso en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Infórmese al *a quo* la decisión, mientras que por Secretaría se gestionará lo pertinente con la oficina de reparto. En firme esta providencia, ingrese el expediente digital al Despacho para los trámites propios de la alzada.

TERCERO: Sin costas.



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO